

Mocoa, 7 de noviembre de 2023

Señor
JUEZ MUNICIPAL DE MOCOA (REPARTO)
E. S. D.

PROCESO:	ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE:	NEIRA AMPARO CÓRDOBA CERÓN C.C. N°: 69.005.188
ACCIONADO:	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO - DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
MEDIDAS:	SUSPENSIÓN EFECTOS DECRETO 367 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 PROFERIDO POR GOBERNADOR DEL PUTUMAYO

NEIRA AMPARO CÓRDOBA CERÓN, identificada con Cédula de Ciudadanía número **69'005.188** expedida en Mocoa - Putumayo, mayor de edad y vecina de la ciudad de Mocoa - Putumayo, actuando en nombre propio, respetuosamente me permito interponer ante su Honorable despacho **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de la **GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO** representada por el Doctor **BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA**, quien profirió el **DECRETO 367 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023**, mediante el cual convoca a los ciudadanos residentes en el municipio de Santiago - Putumayo, a un nuevo proceso electoral en el que **UNICAMENTE** se elegirán Concejales y Alcalde Municipal, coartando el derecho a votar por los candidatos a la Asamblea Departamental para la cual soy candidata avalada por el partido Conservador Colombiano, vulnerando, por una parte, mi derecho fundamental enlistado en los numerales 1 y 2 del Artículo 40 Constitucional de Elegir y ser elegida, para, entre otros, **PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLÍTICO**, y por otra, el **DEBIDO PROCESO** constitucional, de acuerdo a los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO: El día veintinueve (29) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se llevaron a cabo elecciones regionales a nivel Nacional, para elegir por voto popular los cargos públicos a Alcalde, Concejo, Gobernador y Asamblea Departamental, en cada uno de los 1.103 municipios y 33 departamentos del país, hecho de notorio conocimiento público e interés Nacional.

SEGUNDO: En el mencionado proceso de elección democrática, la suscrita inscribió su candidatura para ser elegida como Diputada a la Asamblea del Departamento del Putumayo con Aval del Partido Conservador Colombiano, correspondiéndole el número 51 en la tarjeta electoral.

TERCERO: En el transcurso de la realización del evento democrático el día 29 de octubre del 2023, como es de conocimiento general, en el municipio de Santiago - Putumayo se suscitaron hechos que dieron como resultado la suspensión de la Jornada Electoral por parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Departamento del Putumayo, toda vez que, siendo aproximadamente las 9:30 a.m., en el Colegio Ciudad Santiago se presentaron disturbios, en los cuales algunas personas, de manera violenta destruyeron el material electoral de ocho (8) mesas de votación, porque, al parecer, un ciudadano denunció que los tarjetones se encontraban marcados con anterioridad,

hechos que constituyen materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: El día dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), el Señor Gobernador del Putumayo profirió el Decreto número 367, con el cual convoca para el tres (03) de diciembre del presente año, a nuevas elecciones municipales en la LOCALIDAD de Santiago, en la que, únicamente se podrá votar por ALCALDIA y CONCEJO, excluyendo gobernación y ASAMBLEA, decisión que a todas luces afecta mis derechos fundamentales como candidata a la Asamblea Departamental del Putumayo, toda vez que como se demuestra en el boletín número 40 con el 96.93% de mesas informadas en el pre conteo, señalado en la plataforma de la Registraduría Nacional, me dejó en segundo lugar de la lista del partido Conservador Colombiano con 2.168 votos, calculando una mínima diferencia de 49 votos con el candidato DIEGO FERNANDO ZAMBRANO PARDO, quien obtuvo la primera posición con 2217 votos.

QUINTO: Es de notorio conocimiento que, el municipio de Santiago es uno de mis fortines electorales, y teniendo en cuenta su censo electoral, sin duda, cambiará el resultado de las elecciones a la Asamblea Departamental que me permitirá ocupar el primer puesto en la lista del partido Conservador Colombiano, obteniendo la curul, toda vez que, cuento con el apoyo de un considerable número de líderes sociales que han venido realizando un trabajo importante en mi proyecto político en esa comunidad, situación que quedó demostrada en las anteriores elecciones realizadas en el año 2019, cuya votación me permitió ser elegida diputada a la Asamblea Departamental.

SEXTO: El señor Gobernador al determinar que en la nueva convocatoria no habrá votación para ASAMBLEA, como lo promulga el acusado Decreto, trasgrede mi derecho fundamental a ser elegida y a los ciudadanos residentes en el municipio de Santiago les limita el derecho fundamental de elegir a quienes los representen en la asamblea Departamental.

SÉPTIMO: El trabajo realizado en mi proyecto político en el municipio de Santiago, ha demandado tiempo, esfuerzo físico y recursos económicos que, sin duda, infería en mis expectativas de ser elegida Diputada, razón por la cual invoco la intervención de la Rama Judicial representada por su Señoría, para evitar que, el actuar de unos pocos desadaptados que probablemente cometieron varios delitos electorales, afecten mi derecho fundamental y el de algunos colegas candidatos a ser elegidos.

OCTAVO: La decisión tomada y anunciada frente a las elecciones en el municipio de Santiago - Putumayo emitida por la Gobernación, está obviando la supremacía de la Constitución Nacional, sobre las disposiciones legales adoptadas para su promulgación, por lo tanto, se debe dar prelación a la misma al momento de interpretar o aplicar la ley, pues de no hacerlo se configuraría una decisión inconstitucional por estar en contra de los derechos y principios de la Constitución Política de Colombia.

NOVENO: Se trata de una decisión irregular tomada por la Gobernación del departamento del Putumayo, al convocar a nuevas elecciones en las que se votará únicamente por alcaldía y concejo, indebidamente motivada en lo expresado por la Registradora Delegada Departamental (sic), en el Comité extraordinario de Seguimiento Electoral realizado el 1 de noviembre de 2023, como se plasmó en el considerando octavo del precitado acto refiriendo lo señalado en la Ley 1437 de 2011, CPACA, especialmente lo contemplado en el numeral 1° del Artículo 288, que establece que, cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada

en el numeral 1° del artículo 275 de este código se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados y en el inciso siguiente, preceptúa que, cuando los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del 25% de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral se ordenará la elección en toda la circunscripción.

Nótese que, La Registraduría del Estado Civil y la Gobernación del Putumayo están usurpando facultades exclusivas de los Jueces de lo Contencioso Administrativo cuando en sus sentencias declaren nulidades de actos de elección, calculando porcentajes y decretando medidas que son consecuencia de providencias judiciales.

DÉCIMO: La accionante presentó solicitud de saneamiento ante la Comisión Escrutadora Departamental delegada por el Concejo Nacional Electoral, el cual resolvieron improcedente por ser incompetentes para resolver el mismo.

Por las circunstancias expuestas se torna de extrema necesidad acudir a la intervención del juez constitucional para evitar que este daño sea irremediable, pues el medio de control a utilizar para atacar esta decisión administrativa toma mucho tiempo, por lo tanto, se convierte en un mecanismo ineficaz a la hora de proteger mis derechos fundamentales, por lo que, respetuosamente, invoco la protección de mis derechos y elevo mi solicitud ante su Despacho para que se consideren las siguientes:

II. PRETENSIONES

PRIMERA. Se **TUTELEN** mis derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegida, para poder participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mismos que han sido vulnerados con el Decreto número 367 adiado 2 de noviembre de 2023, y se ordene al Señor Gobernador del Putumayo incluir en la convocatoria para elecciones del 3 de diciembre del presente año, el voto por ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.

SEGUNDA: Se **ORDENE** a la Comisión Escrutadora Municipal de Santiago o a la Comisión Departamental del Putumayo, realizar el escrutinio de los votos depositados en las urnas que no fueron violentadas en los hechos ocurridos en la localidad de Santiago Putumayo el domingo 29 de octubre de 2023.

TERCERA: Ordenar la suspensión provisional temporal o definitiva de los efectos jurídicos generados con ocasión a la expedición del Decreto número 367 expedido por la Gobernación del Putumayo el día tres (3) de noviembre del 2023.

III. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS Y CONSIDERACIONES.

Artículo 1. Constitución Política Colombiana: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y a solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Constitución Política Colombiana: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTICULO 4. Constitución Política colombiana. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Artículo 29. Constitución Política colombiana: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Artículo 40. Constitución Política colombiana Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido

Mediante sentencia T-232 de 2014 la Corte Constitucional sostuvo que el artículo 40 de la constitución política tenía una doble connotación, mencionado lo siguiente *"Partiendo del supuesto anterior, el derecho a elegir y ser elegido es, entonces, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para "acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función". En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, "consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado."*

La corte en sentencia T-045 de 1993, se ocupó del derecho de representación precisando lo siguiente *"Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo."*

Igualmente es importante mencionar que la adopción de tratados internacionales que consignan derechos políticos, se ha confirmado el carácter de fundamental de tales prerrogativas. Así se expuso en la sentencia T-050 de 2002: *"Por lo expuesto es claro para la Sala que la esencia misma de nuestro sistema democrático se encuentra en el ejercicio libre de los derechos políticos consagrados en la Constitución, así como en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país (artículo 21.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y cuya naturaleza de Derechos Fundamentales ha sido reconocida ampliamente en la jurisprudencia de esta Corte"*

La decisión tomada por la administración pública de no realizar las elecciones para cargos de gobernación y asambleas departamentales en el municipio de Santiago, esta afectados las dos connotaciones consagradas por el constituyente, puesto vulnera el derecho de los candidatos a la asamblea de ser elegidos, como también esta vulnerado el derecho fundamental de los habitantes de Santiago pues como se evidencia en horas de la mañana se cerraron la urnas para votar, lo anterior debido a los hechos violentos contra el material electoral, por esta razón no pudieron acudir a ejercer su derecho al sufragio.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS.

La procedencia de la acción de tutela frente a Actos Administrativos proferido por la administración pública, se ha consagrado en lo señalado por el artículo 86 de la Constitución Política en el cual se esbozan las características de la acción de tutela, así como también se indica que se trata de un mecanismo del cual dispone todo ciudadano Colombiano ya sea a nombre propio o a través de interpuesta persona, para acudir al aparato judicial en protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que los mismos se encuentren vulnerados con ocasión de la acción u omisión de cualquier autoridad pública o algún particular.

Resulta necesario destacar que el inciso tercero de la precitada norma, consigna una regla especial y concreta respecto al asunto de la procedencia en el sentido formal pues menciona, *“la tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*

Lo anterior permite concluir que la acción de tutela es de carácter subsidiario, por cuanto se verifique que el afectado no cuente con otro mecanismo judicial para acudir a la protección de sus derechos fundamentales o este no sea eficaz para garantizar su protección, no obstante, puede prosperar como mecanismo transitorio cuando se advierta la existencia de un perjuicio irremediable. Con respecto a esta figura, la Corte ha señalado que para que se ocasione un perjuicio irremediable es preciso que aquel sea cierto, inminente grave y de urgente atención, con ocasión de lo anterior se ha mencionado:

En el mismo sentido, la Constituyente introdujo una excepción a dicha regla en el citado artículo 86 Superior: a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la acción de tutela cuando quiera que *“se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*. La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que para efectos de esta disposición únicamente se considerará que un perjuicio irremediable cuando; de conformidad con el caso particular, sea a.) cierto e inminente, esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos, b.) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, c.) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico de forma irreparable.

Por lo anterior, la vulneración del derecho fundamental invocado se deriva de la participación ciudadana en el ejercicio del poder público establecida en el artículo 40 de la Constitución, por ende la acción de tutela es totalmente procedente en este caso, pues busca impedir la exclusión del ejercicio del derecho político a representar, cuando quien la invoca tiene la oportunidad de ser elegida mediante voto popular para ocupar el cargo de Diputada en la Asamblea Departamental, este es un derecho que se ejerce en momentos constitucionalmente preestablecidos que no pueden ser sustituidos o postergados. El derecho de participación política, en una de sus manifestaciones se materializa como el derecho a ser elegido, es decir a representar una colectividad, y el ejercicio de este derecho, dependiendo del cargo, se encuentra circunscrito a un límite temporal que establece un período establecido en la Constitución.

Por tanto, en razón a lo anterior se concluye que el derecho a la representación no puede ser ejercido en cualquier momento, sino que cuenta con un límite de tiempo

según los establece la Constitución, la tutela funge como el mecanismo de protección transitoria, al estar en entredicho el ejercicio de un derecho fundamental, pues cada día que pasa se resta mi posibilidad de ejercerlo.

Aunado a ello, se trata de un perjuicio grave ya que deriva en una eventual vulneración de mis derechos políticos que inclusive ha representado los intereses de mi colectivo político en un anterior periodo legislativo en la misma corporación a la que me postulo como candidata y aquello compromete principios y valores protegidos por la Constitución; Además el otorgamiento de las credenciales a los candidatos excluyendo las elecciones en Santiago Putumayo para la circunscripción de asamblea departamental generara una afectación grave y irreversible a los derechos de la accionante.

Por ello, respecto a la procedencia del presente amparo se considera de carácter excepcional pues el Estado ha actuado con prescindencia de todo referente legal y ha incurrido en una vía de hecho que me impide contar con las garantías mínimas del debido proceso administrativo, señalado por la jurisprudencia así, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite sólo es posible cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte del funcionario, con la cual vulnera las garantías establecidas en la Constitución. Situación que se configura en este caso pues el Acto Administrativo acusado interpretó la ley sin tener en cuenta los derechos fundamentales que afecto con tal decisión.

De lo anteriormente expuesto, queda demostrado mi interés real de evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que la reclamación se hace en un tiempo prudencial posterior al Acto proferido, se debe a los graves hechos de violencia de notorio conocimiento los cuales resultaron en menoscabar los derechos políticos que me asisten y se considera un hecho de bastante importancia e incidencia en nuestro territorio que derivado de su cumplimiento se desarrollaría un hecho grave en mi contra, el cual requiere de solución inmediata a través del amparo constitucional de Tutela.

FALSA O INDEBIDA MOTIVACIÓN DEL DECRETO 367 DEL DOS (2) DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Al respecto, se concluye que el Estado es quien debe velar por materialización de estos fines constitucionales; tal es el caso el control que se ejerce en sede electoral, a través de organismos como la Registraduría del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, que desempeñan el rol de dirección y vigilancia. Sin embargo, por disposición legal también se faculta a los entes territoriales del orden Departamental, para que intervengan en casos no premeditados en los procesos electorales por ejemplo la alteración del orden público; quienes, mediante decisiones motivadas, buscan garantizar el ejercicio de una democracia, transparente y participativa, no solo para el pueblo quien ejercita su derecho al voto, sino también para quienes son aspirantes a candidatura del Consejos, Alcaldías, Gobernación y Asamblea Departamental.

La facultad aludida anteriormente se ve reflejada en el artículo 288 y 275 de la Ley 1437 del 2011, en cuyo contenido literal se expone lo siguiente:

“Artículo 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de

votación afectados. Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción."

A su vez el artículo 275, señala lo siguiente:

"Artículo 275: Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: 1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales...

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones".

En este sentido, es pertinente señalar que frente a la situación acontecida en el municipio de Santiago-putumayo, cuya irregularidad en la custodia de los tarjetones desató la alteración del orden público, la destrucción del material electoral, se constituye como urgente y necesaria la adopción de medidas que pongan fin a los actos de violencia; actuar que se encuentra respaldado con la declaratoria del toque de queda, decretado por la autoridad local del Municipio de Santiago (P). No obstante, frente a esta situación se torna necesario el pronunciamiento del ente territorial de orden Departamental, en cumplimiento de las facultades conferidas por la Ley; actuar que de primera mano se ve reflejado con la expedición del acto administrativo denominado "Decreto 367 del 02 de noviembre del 2023, por medio del cual se convocan las elecciones de alcalde y concejo Municipal en el Municipio de Santiago, Departamento del Putumayo", siendo la resolutive la siguiente:

En mérito de lo expuesto, el Gobernador del Departamento del Putumayo,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO. CONVOCAR a nuevas elecciones municipales en la localidad de Santiago – Departamento del Putumayo, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. FIJAR como fecha para la realización de elecciones municipales en la localidad de Santiago – Departamento del Putumayo, el día tres (3) del mes de diciembre del año 2023.

ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR las presentes decisiones, adjuntando copia del Decreto, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA El presente decreto rige a partir de su expedición.

Al respecto debe acotarse que el acto administrativo por medio de cual se convocan nuevas elecciones en el municipio de Santiago, es un acto de contenido electoral de naturaleza procesal "trámite"¹, que da impulso a la actuación administrativa que

¹ 8 i) CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A-Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS-Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020).-Radicación número: 25000-23-42-000-2014-00109-01(1997- 16)- Los actos preparatorios, accesorios o de trámite: Han sido definidos como aquellos que se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y solo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración.

finiquita con la expedición de los actos electorales que en últimas contienen la voluntad de la administración creadora de derechos o efectos jurídicos, determinándose así que el amparo constitucional, es procedente siempre que el mismo comporte una manifestación irrazonable o desproporcionada que vulnere los derechos fundamentales.

Sobre el referenciado acto administrativo llama la atención, los argumentos de hecho y derecho que constituyen la parte motiva del mismo, los cuales oteados a plenitud, llevan concluir que el acto administrativo por medio del cual se convocaron las elecciones, es irrazonable y desproporcional, pues adolece de falsa motivación por falta de interpretación y aplicación de las normas legales y constitucionales, lo cual constituye una causal de nulidad, pues claramente con citada decisión se vulneran mis derechos fundamentales.

Sobre la falsa motivación, la sección cuarta del Consejo de Estado de estado dispuso lo siguiente:

Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente".

Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente:

"La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.

Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo: la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos.²

En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la nulidad del acto administrativo³.

Así la cosas, en aras de que prospere la nulidad del Decreto expedido por la Gobernación del Putumayo, cabe destacar que previo a ordenar las nuevas elecciones en el municipio del Santiago Putumayo, los considerandos del acto administrativo se cimentaron bajo el articulado 275, numeral 1, 288 de la Ley 1437 del 2011, siendo del caso precisar que referente a la situación concreta se adujo lo siguiente:

² Sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 16090, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

³ Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, CP. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

circunscripción. En las gráficas que nosotros tenemos proyectadas; hicimos una comparación del censo electoral del municipio de Santiago con el censo del Putumayo, que observamos; el censo total del Putumayo, es de 254.600 es nuestro potencial electoral, el censo de Santiago es de 6.727, que quiere decir lo siguiente; que hay una afectación con moderación a la circunscripción departamental del

13%, por lo anterior, teniendo en cuenta que las elecciones de gobernador y asamblea departamental, en este sentido, no se repetirían estas en el municipio de Santiago; ahora, si vamos a pasar a revisar la situación de las elecciones a nivel de consejo, para el municipio de Santiago instalamos 21 mesas de votación de las cuales 8 fueron adjuntadas, si realizamos la comparación estas 8 mesas, corresponden al 38% del censo total del Municipio de Santiago, ósea que si hay una afectación del 25%, por lo tanto se repiten las elecciones de alcalde y consejo. Entonces, en este orden de ideas y teniendo en cuenta, cuáles son las elecciones que debemos repetir, entonces nos vamos a remitir a lo que dice la norma, a cuando debe realizarse y quien debe convocarlas, entonces nos remitimos a nuestro código electoral Decreto Ley 2241, artículo 128, en caso de grave perturbación del orden público que haga imposible el desarrollo de las votaciones, el respectivo gobernador, o comisario o la comisión del Gobierno Nacional, diferirá las elecciones y comunicara a la Registraduría con un mes de anticipación"

Oteado a plenitud, los argumentos esbozados por la Gobernación se observan que en aplicación de la disposición consagrada en el artículo 288 del Ley 1437 del 2011, no se dio apertura a las elecciones de la Gobernación y Asamblea Departamental debido al porcentaje de afectación a la Circunscripción Departamental, el cual según estadística del Departamento es de 13%; observándose al respecto, que para concluir determinada decisión, la administración no tuvo en cuenta los hechos que acontecieron el día 29 de octubre del 2023; fecha en la que se celebró la votaciones, los cuales, se encuentran acreditados en grabación de videos, y las investigaciones Fiscalía General de la Nación, y delegados de la Registraduría para el Departamento del Putumayo, donde se puede distinguir que se trata de actos de violencia empleados por parte de la población de Santiago-Putumayo, sobre las urnas a causa de una aparente irregularidad en los tarjetones.

Ahora, siendo que se trata de hechos que si se encuentran demostrados, considero que los mismos debieron de servir de fundamento para expedir el acto administrativo en mención, pues de haber sido este el proceder de la administración lo más justo y legal, era dar aplicación a la consecuencia planteada en el inciso 1 del artículo 288 de la Ley 1437 del 2011, tendiente a que se ordene repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados, y que se permite mi participación para ser elegida Diputada a la Asamblea General del Departamento del Putumayo con Aval y en representación del Partido Conservador.

Además a mi criterio no es válido que el Departamento, para convocar a elecciones, excluya de participar a la Asamblea Departamental, bajo la condición establecida por el Legislador en el inciso 2 del artículo 288 de la Ley 1437 del 2011; téngase en cuenta su señoría que en vista de que me faltan solo unos votos, lo que pretendo no es la repetición de la elección en toda la circunscripción ya que no se cumple con tal requisito, pues la misma norma lo dispone, por el contrario lo que pretendo es la nueva elección únicamente en los puestos afectados; derecho que me asiste pues la misma norma lo consagra en inciso primero del mencionado artículo y debe garantizarse, en procura de promoverla igualdad referente a la categoría de alcaldía y Concejo.

Expuesto el anterior panorama, manifiesto su señoría que, con la decisión administrativa, se vulneró de forma evidente mis derechos fundamentales por las siguientes razones:

1. La Gobernación del Putumayo, no interpretó en debida forma las consecuencias de los actos de violencia, respecto de las garantías políticas que nos asisten como candidatos electos para la Asamblea Departamental, avizorándose de este modo una vulneración al debido proceso administrativo.
2. A pesar de cumplir con todos los requisitos de Ley para ser candidata a la Asamblea Departamental, se me impide participar en las nuevas elecciones a celebrar de día 3 de diciembre de 2023, específicamente en el municipio donde contaría con un número significativo de votos necesarios para superar al primer lugar y ser designada como Diputada con Aval y en representación del Partido Conservador Colombiano; observándose sobre este aspecto la vulneración del derecho al voto en igualdad de condiciones sobre la comunidad de Santiago-Putumayo.

Así las cosas, ruego su señoría se declare procedente la presente acción constitucional, pues actualmente me encuentro ante un perjuicio irremediable en mi carrera política, objeto de protección de forma transitoria, siendo del caso señalar que mi propósito en esta segunda oportunidad es representar a mi territorio para promover un desarrollo económico, social y cultural; propósito por el que se ha venido laborando desde hace mucho tiempo, todo lo anterior para hacer realidad mis expectativas; mismas que estoy a punto de alcanzar, si se toma una decisión basada en las garantías de las máximas constitucionales que permita el ejercicio de una democracia participativa y transparente en el lugar donde surgió afectación a las mesas de votación.

IV. PRUEBAS DE OFICIO

Solicito respetuosamente si ha bien se considera, se oficie a la Fiscalía General de la Nación, delegados de la registraduría para el departamento del Putumayo, para que envíen TODA la evidencia que está en su poder y que sustenta lo manifestado en la presente acción de tutela.

V. ANEXOS

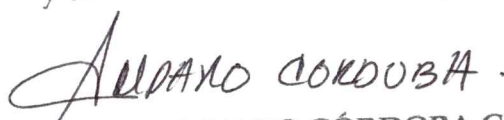
1. Decreto 367 del 02 de noviembre del 2023, proferido por la Gobernación del Putumayo.
2. Recurso de saneamiento presentado ante el Concejo Nacional Electoral.

VI. NOTIFICACIONES

La notificación la recibir en la Cra 20 # 15-52 B/ Villa Caimarona, al correo electrónico Amparitocor68@hotmail.com y al número de celular 3138318915
Atentadamente,

VII. JURAMENTO

Para los efectos previstos en el Art. 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he instaurado acción de tutela por los mismos hechos y derechos violados, ante ninguna autoridad judicial.


NEIRA AMPARO CORDOBA CERÓN
C. c. 69.005.188 de Mocoa (P)



DECRETO

367

02 NOV 2023

**POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCAN ELECCIONES DE ALCALDE Y
CONCEJO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO**

El Gobernador del Departamento Putumayo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 298 y 305 de la Constitución Política, y artículo 128 del Decreto Nacional 2241 de 1986,

CONSIDERANDO

Que el artículo 1° de la Constitución Política dispone que: *"Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"*.

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece: *"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"*.

Que, el día 29 de octubre del 2023, fecha señalada para la jornada electoral regional, se reunió e instaló el Puesto de Mando Unificado para el seguimiento y control del desarrollo de dicha jornada, en el que hicieron presencia, entre otras autoridades, la doctora CLAUDIA HELENA OTALORA, Subdirectora Técnica en la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien actuó como Enlace del Señor Presidente de la República y la Doctora LIDA ALEXANDRA ORDOÑEZ Delegada del Señor Registrador Nacional.

Que, en el curso del día 29 de octubre del 2023, en el desarrollo del Puesto de Mando Unificado, se conocieron los reportes de las autoridades públicas del Municipio de Santiago Departamento del Putumayo, quienes dieron a conocer la ocurrencia de graves hechos de alteración y afectación del orden público que impidieron la realización la jornada electoral regional en dicha localidad, los cuales



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co



se registraron en el casco urbano del municipio, específicamente en las mesas instaladas en la Institución Educativa Ciudad Santiago. Los eventos fueron de tal gravedad que ameritaron la declaratoria del "toque de queda", según dio a conocer el Doctor HERNEY LUNA PEJENDINO, Alcalde Municipal de Santiago Putumayo.

Que, la realización de la jornada electoral del día 29 de octubre del 2023 en el municipio de Santiago Putumayo fue postergada por la ocurrencia de los hechos anteriormente señalados, decisión que se conoció en desarrollo de la reunión del Puesto de Mando Unificado.

Que, el Gobernador del Departamento del Putumayo Buanerges Florencio Rosero Peña, a través de Oficio DG 150 2023, comunicó al Presidente de la Republica los graves hechos de afectación de orden público registrados en el Municipio de Santiago Putumayo, que imposibilitaron el ejercicio y desarrollo normal de los comicios, con las garantías debidas.

Que, el día 1 de noviembre del 2023 se llevó a cabo de forma extraordinaria el Comité de Seguimiento Electoral con el objetivo de abordar *"los lineamientos de carácter jurídico y administrativo frente a la situación que se presentó en la jornada electoral en el Municipio de Santiago el día 29 de octubre."* En el presente Comité, la Registradora Delegada Departamental LIDA ALEXANDRA ORDOÑEZ, expresó que: *"teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1437 desde 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el TÍTULO VIII, Disposiciones Especiales para el Trámite y Decisión de las Pretensiones de Contenido Electoral. ARTÍCULO 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: numeral primero 1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. 2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. Es así como en este mismo sentido el artículo ARTÍCULO 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias: Primero; Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados. Segundo; Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción. En las gráficas que nosotros tenemos proyectadas; hicimos una comparación del censo electoral del municipio de Santiago con el censo del Putumayo, que observamos; el censo total del Putumayo, es de 254.600 es nuestro potencial electoral, el censo de Santiago es de 6.727, que quiere decir lo siguiente; que hay una afectación con moderación a la circunscripción departamental del*



13%, por lo anterior, teniendo en cuenta que las elecciones de gobernador y asamblea departamental, en este sentido, no se repetirían estas en el municipio de Santiago; ahora, si vamos a pasar a revisar la situación de las elecciones a nivel de consejo, para el municipio de Santiago instalamos 21 mesas de votación de las cuales 8 fueron adjuntadas, si realizamos la comparación estas 8 mesas, corresponden al 38% del censo total del Municipio de Santiago, ósea que si hay una afectación del 25%, por lo tanto se repiten las elecciones de alcalde y consejo. Entonces, en este orden de ideas y teniendo en cuenta, cuáles son las elecciones que debemos repetir, entonces nos vamos a remitir a lo que dice la norma, a cuando debe realizarse y quien debe convocarlas, entonces nos remitimos a nuestro código electoral Decreto Ley 2241, artículo 128, en caso de grave perturbación del orden público que haga imposible el desarrollo de las votaciones, el respectivo gobernador, o comisario o la comisión del Gobierno Nacional, diferirá las elecciones y comunicara a la Registraduría con un mes de anticipación"

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Decreto 2241 de 1986, el cual dispone: "En caso de grave perturbación del orden público que haga imposible el desarrollo de las votaciones, el respectivo Gobernador, Intendente o Comisario, con aprobación del Gobierno Nacional, diferirá las elecciones y comunicará a la Registraduría Nacional y al público, con un (1) mes de anticipación, por lo menos, la nueva fecha en que deban verificarse", se procederá a definir la fecha probable de realización de los comicios pendientes en el municipio de Santiago Putumayo, atendiendo la recomendación del Comité de Control y Seguimiento Electoral. No obstante, pese haber anunciado como fecha tentativa la del 26 de noviembre del 2023, se modificará para el 3 de diciembre del 2023, para ajustar la decisión a la norma en cita.

En mérito de lo expuesto, el Gobernador del Departamento del Putumayo,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO. CONVOCAR a nuevas elecciones municipales en la localidad de Santiago – Departamento del Putumayo, por las razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. FIJAR como fecha para la realización de elecciones municipales en la localidad de Santiago – Departamento del Putumayo, el día tres (3) del mes de diciembre del año 2023.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!






ARTÍCULO TERCERO. COMUNICAR las presentes decisiones, adjuntando copia del Decreto, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA El presente decreto rige a partir de su expedición.

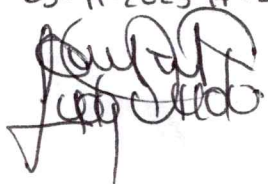
Expedido en Mocoa Putumayo, a los


BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador de Departamento del Putumayo

	Nombres Completos	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó	Fernando Rodríguez Andrade	Secretario de Gobierno Departamental	Profesional de SGD	
Proyectó	Dario Fernando Montero	Despacho	Asesor de Cumplimiento Legal	
Aprobó	Carlos Gerardo González Ortega	Secretario de Gobierno Departamental	Secretario de Gobierno Departamental	

Señores:

DELGADOS COMISIÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGADOS DEPARTAMENTALES REGISTRADURÍA NACIONAL
MOCOCHA - PUTUMAYO
E. S. D.

Recibí
03-11-2023 H: 2:38 P.


ASUNTO:	SOLICITUD DE SANEAMIENTO - NULIDAD DE ACTO DE ELECCIÓN.
RECLAMANTE:	NEIRA AMPARO CÓRDOBA CERÓN

NEIRA AMPARO CÓRDOBA CERÓN, identificada con cedula de ciudadanía 69005188 de Mocoa (P), actuando como candidata a la asamblea del departamento Putumayo avalado por el partido conservador, de manera respetuosa y dentro del término oportuno, me permito presentar reclamación electoral consagrada en el Artículo 194 numeral 4 del decreto ley 2241 de 1986, Lo anterior lo sustento en los siguiente:

I. HECHOS:

PRIMERO: El día veintinueve (29) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se llevaron a cabo las elecciones regionales en el departamento del Putumayo para elegir mediante voto popular los cargos para Alcalde Municipal, Gobernador Departamental, Diputados a la Asamblea Departamental y Concejales Municipales en cada uno de los Departamentos y Municipios del Putumayos.

SEGUNDO: En el mencionado proceso de elección democrática, la suscrita postuló su candidatura para ser elegida como Diputada a la Asamblea General del Departamento del Putumayo con Aval y en representación del Partido Conservador Colombiano ostentando el número 51 en el respectivo tarjetón.

TERCERO: En medio de la celebración del evento democrático del día domingo, se suscitaron hechos en el municipio de Santiago - Putumayo que dieron como resultado la suspensión de la Jornada Electoral por parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) del departamento del Putumayo, toda vez que, siendo aproximadamente 9.30 am, en el Colegio Ciudad Santiago se presentaron disturbios, donde personas de manera violenta atentaron en contra de los funcionarios que asistían y custodiaban el proceso de sufragio en ese momento, lanzando sillas y destruyendo el material electoral de ocho (8) mesas de votación, argumentando supuestamente que un ciudadano denunció haber corrupción en la votación pues los tarjetones se encontraban marcados con anterioridad; Lo anterior es materia de investigación por parte de la fiscalía.

CUARTO: La gobernación del Putumayo, mediante PMU instaurado, declaró que las elecciones en el municipio de Santiago se van a celebrar únicamente para elección del cargo para alcaldía y concejo municipal de este municipio, argumentado de el numeral primero del artículo 275 de CAPCA, y las consecuencias que traer consigo en el artículo 288 del mismo cogido, por lo anterior se afectan mis derechos fundamentales directamente toda vez que me encuentro en el segundo lugar de la lista del partido conservador y la diferencia de votos con el primer contendor es de 49 votos y el censo electoral que tiene Santiago Putumayo sin duda podría cambiar tal situación, adicionalmente se está cometiendo una transgresión grave a derecho fundamental al sufragio de las personas que viven en Santiago pues no podrán decidir las persona que los represente en las diferentes corporaciones.

QUINTO: el municipio de Santiago es uno de los fortines electorales que como candidata tengo, Pues cuento con el apoyo de muchos líderes sociales quienes también están sufriendo trasgresiones en su derechos fundamentales a votar, pues no pudieron ejercer este derecho toda vez que se cerraron las urnas, es importante mencionar que en este territorio se realizó un trabajo político importante con la comunidad, y población de la cual obtuve una votación considerable imprescindible para obtener mi curul como diputada en las anteriores elecciones del 2019 a la Asamblea Departamental.

SEXTO: La decisión tomada y anunciada frente a las elecciones en el municipio de Santiago – Putumayo emitida por la Gobernación mediante PMU, está obviando que la supremacía de la constitución Nacional, por lo tanto, se debe dar prelación a la misma al momento de interpretar o aplicar la ley pues de no hacerlo se configuraría una decisión inconstitucional por esta en contra de los derechos y principio de la constitución política de Colombia.

SÉPTIMO: El ejercicio político realizado en el municipio de Santiago, ha demandado mucho tiempo y una inversión que sin duda infería en mis expectativas de ser elegida, razón por la cual se necesita la intervención inmediata del Consejo Nacional Electoral para evitar que los delitos electorales cometidos por algunas personas no afecten mi derecho fundamental y el de mis colegas a ser elegidos, igualmente el derecho fundamental de mi electoral a elegirme como su candidata.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se introdujo un nuevo norte político y social para Colombia dentro del cual se determinó que es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, empero garantizando la descentralización, la autonomía de sus entidades territoriales y la democracia participativa y pluralista; armonizada con el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, sentando las bases para la inclusión de todas las expresiones culturales del territorio.

El artículo 40 numeral 1 de la constitución Política de Colombia, ha traído una doble connotación al derecho a elegir y ser elegido, y en este orden de ideas, en Sentencia T-232 de 2014 la Corte Constitucional sostuvo que esta misma postura de la siguiente manera: *“Partiendo del supuesto anterior, el derecho a elegir y ser elegido es, entonces, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para “acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función”. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, “consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado”*

La decisión tomada por la administración pública de no realizar las elecciones para cargos de gobernación y asambleas departamentales en el municipio de Santiago, esta afectados las dos connotaciones consagradas por el constituyente, puesto vulnera el derecho de los candidatos a la asamblea de ser elegidos, como también esta vulnerado el derecho fundamental de los habitantes de Santiago pues como se evidencia en horas de la mañana se cerraron la urnas para votar, lo anterior debido a los ataques violentos al personas que custodiaba las urnas como también al material electoral por esta razón no pudieron acudir a ejercer su derecho al sufragio.

La sentencia T-045 de 1993, se ocupó del derecho a la representación, precisó que los derechos políticos son fundamentales, así: "Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo."

Además, la adopción de tratados internacionales que consignan derechos políticos, se ha confirmado el carácter de fundamental de tales prerrogativas. Así se expuso en la sentencia T-050 de 2002: "Por lo expuesto es claro para la Sala que la esencia misma de nuestro sistema democrático se encuentra en el ejercicio libre de los derechos políticos consagrados en la Constitución, así como en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país (artículo 21.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y cuya naturaleza de Derechos Fundamentales ha sido reconocida ampliamente en la jurisprudencia de esta Corte"

En este sentido, se considera que, de acuerdo a los supuestos fácticos presentados en este escrito, estaríamos debatiendo una causal de nulidad establecida en el numeral 1. Y 2 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual reza lo siguiente:

"Artículo 275: Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: 1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. 2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones".

Sobre el particular, debe destacarse que el comportamiento aludido por los habitantes del municipio de Santiago-Putumayo "ejercicio de violencia y destrucción del material electoral de 8 mesas de votación", obliga a las autoridades Departamentales y Electorales a que con fundamento en el artículo 258 de la Constitución Política se adopte unas medidas correctivas que permita el goce de las garantías que le asisten a quienes participan a fines ser elegidos, y por ende garantice al resto de la ciudadanía el ejercicio de derecho a elegir, velando en este sentido por el respeto al principio de la democracia, la transparencia y eficacia del voto.

Así la cosas, planteada la causal de nulidad, se determina que la autoridad departamental, debe prever la nulidad del acto de elección, cuya consecuencia es la repetición de la votación la zona afectada; consecuencia que se encuentra cimentada en el numeral 1 del artículo 288 del CPACA, se la siguiente manera:

"Artículo 288. Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el numeral 1 del artículo 275 de este Código se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados. Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción."

Siendo este el proceder actual de la autoridad Departamental frente a la situación de orden público acontecida en el municipio Santiago-Putumayo, se debe manifestar que por parte de la suscrita se tiene conocimiento de que se fijará nueva fecha para las elecciones en citado municipio, pero como candidata a la Asamblea Departamental en representación del partido Conservador, me causa sorpresivo el comunicado, según el cual, las elecciones se promoverán para definir la candidatura de Alcalde Municipal y consejo, y no para las elecciones de gobernación y asamblea departamental, toda vez que los actos de violencia no afectaron el derecho del voto a más del 25% del censo electoral sino por el contrario solo afectó aproximadamente el 4% de la ciudadanía inscrita en el censo con una circunscripción electoral, lo cual es una interpretación errada a la norma pues en esta se regula el porcentaje máximo exigido para repetir elecciones en toda la circunscripción cuando exista destrucción del material electoral, pero no menciona que la misma no se debe llevar a cabo cuando el material electoral se afectó en un porcentaje inferior, lo cual si se prevé en el numeral 1 del artículo 275 del CPACA, pues como se ha manifestado existieron actos de violencia sobre los nominadores, los electores y las autoridades electorales.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta los intereses que me asisten como candidata a la Asamblea Departamental, con fundamento el artículo 238 de la Constitución Política de Colombia, me encuentro inmersa en la necesidad de impetrar solicitud de saneamiento con destino al Consejo Nacional Electoral frente a la decisión adoptada por el ente territorial, antes de que se declare la elección en mencionado municipio; facultad que se encuentra de igual modo regulada artículo 192 del Código Nacional Electoral, cuya competencia y causal se encuentra reguladas expresamente como se ilustra a continuación:

“ARTICULO 192. El Consejo Nacional Electoral o sus Delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales.

4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.”

El objeto de mi reclamación y por ende de saneamiento, radica en que la decisión aparentemente consolidada por la entidad territorial, vulnera las garantías que me asisten como candidata a la Asamblea Departamental, siendo del caso exponer que, según el resultado de las votaciones mi curul se perdiera por la diferencia de 49 votos respecto al conductor político que se encuentra en el primer lugar de la lista del partido conservador. De manera que al suspender la elección popular para la Asamblea Departamental en el municipio de Santiago-Putumayo, injustamente se me está impidiendo la posibilidad de llegar a ser elegida como Diputada en representación del municipio puesto que realice una inversión y un trabajo arduo en este municipio y esta decisión general un daño irreparable a mi candidatura y a su vez se ve truncado el ejercicio de la democracia, por parte de la ciudadanía, pues la voluntad de la misma se ve doblegada y sometida a los designios de quienes ejercen la violencia; consecuencias que recae sobre el instrumento electoral y por ende me priva de la posibilidad de ser elegida para representar a mi municipio en el orden departamental, al respecto, no debe pasar de imprevisto que hay parte de la ciudadanía esperando la oportunidad para depositar a mi favor su voto de confianza.

Debe aclararse que, por disposición legal, al concurrir la nulidad de un acto de elección por motivo de un acto de violencia sobre los instrumentos electorales, es *opcional repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados, u ordenar la repetir la elección en toda la circunscripción*, y siendo que solo fueron afectados unos puestos de votación, considero que legamente se debe optar por la primera disposición, puesto que la condición de la segunda no se ajusta a la situación fáctica del caso particular, pues lo que se pretende no es la repetición de la elección en toda la circunscripción.

III. PRETENSIONES:

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Departamento del Putumayo, es necesario que se sirva autorizar lo siguiente:

PRIMERO PRINCIPAL:

Ordenar la nulidad de las elecciones en el municipio de Santiago - Putumayo, según las causales con gradas en el numeral 1 y 2 del artículo 137 de la ley 1437 del 20211, en consecuencia, se ordena a repetir o realizar la elección para elegir gobernador y diputados de la Asamblea departamental de Putumayo.

SECUNDARIA:

Si la pretensión principal no prospera, solicito respetuosamente se escruten las mesas que no fueron afectados por la violencia en la munición de Santiago - Putumayo.

IV. PRUEBAS DE OFICIO:

Solicito respetuosamente se ha bien se considera, se oficie a la Fiscalía General de la Nación, delegados de la registraduría para el departamento del Putumayo, para que envíen las actuaciones realizadas desplegadas en el marco de sus competencias en los hechos acontecidos en el municipio de Santiago - Putumayo.

V. ANEXOS:

1. Cedula de ciudadanía.

VI. NOTIFICACIONES:

La notificación la recibir en la Cra 20 # 15-52 B/ Villa Caimarona, al correo electrónico Amparitor68@hotmail.com y al número de celular 3138318915.

Atentadamente,


NEIRA AMPARO CÓRDOBA CERÓN
CC. 69005188 de Mocoa (P)